

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022)

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMANDANTE | : NINY JOANNA PIEDRAHITA URIBE |
| DEMANDADO : | : ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A. y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA |
| TIPO DE PROCESO | : ORDINARIO |
| RADICADO NACIONAL | : 05-001-31-05-018-2018-00309-01 |
| RADICADO INTERNO | : 165-22 |
| DECISIÓN | : -CONFIRMA SENTENCIA |
| ACTA NÚMERO | : 200 |

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicitó se DECLARE la nulidad del dictamen No. 172649 del 16 de noviembre de 2017 realizado por servicios de SALUD IPS SURAMERICANA S.A. y el dictamen No. 071307 del 1º de febrero de 2018 realizado por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA; se declare que la demandante tiene una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% de origen común con fecha de estructuración del 18 de abril de 2009.

Se CONDENE a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar la pensión de invalidez en forma retroactiva, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, desde el 7 de febrero de 2008 (sic); al pago de los intereses moratorios o subsidiariamente, el pago de la indexación; y se condene a las codemandadas en costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que, la demandante se encuentra afiliada al Régimen de Ahorro Individual; la sociedad SALUD IPS SURAMERICANA S.A. en dictamen del 17 de noviembre de 2017 determinó que la demandante tiene una pérdida de la capacidad laboral del 51.41% estructurada el 16 de noviembre de 2017; la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA asignó una pérdida de la capacidad laboral del 51.41% con fecha de estructuración del 16 de noviembre de 2017; por su parte, el 9 de abril de 2018 fue calificada por la IPS Universitaria, en donde se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 50% estructurada el 18 de abril de 2009. La demandante cuenta con 50 semanas entre el 18 de abril de 2006 y el 18 de abril de 2009; la accionada PROTECCIÓN S.A. no ha reconocido la pensión de invalidez.

RESPUESTA A LA DEMANDA

En la contestación de la demanda la accionada SALUD IPS SURAMERICANA S.A. dice que no le consta la afiliación de la demandante a PROTECCIÓN S.A., pero le consta que la IPS SURA en virtud del convenio celebrado con SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. procedió a realizar la valoración y a emitir calificación de pérdida de la capacidad laboral; no le consta las semanas cotizadas por la demandante; ni la falta de reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de PROTECCIÓN S.A.; lo manifestado en relación al dictamen de la IPS Universitaria enuncia una prueba pericial que sustenta las pretensiones de la demanda y no es un hecho. No le constan los demás hechos.

Señaló que SALUD IPS SURAMERICANA S.A. no puede pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda porque en el evento de declararse la nulidad, existe interés de su representada en el resultado del proceso, sin embargo,

dada la participación en este proceso, se opuso a la declaración de nulidad de los dictámenes de primera oportunidad y primera instancia (fls. 252 a 261 del expediente digital 01).

PROTECCIÓN S.A., en la contestación de la demanda acepta que la demandante se afilió al Régimen de Ahorro Individual el 22 de mayo de 2007; la calificación realizada por SALUD IPS SURAMERICANA S.A., entidad con quien su representada tiene contratado el seguro previsional, y determinó una pérdida de la capacidad laboral del 51.41% estructurada el 16 de noviembre de 2017, sin que haya acreditado el requisito de cotizaciones al sistema; acepta la calificación realizada por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA. Que no le consta la calificación realizada por la IPS Universitaria, pero advierte que el mismo, se aparta de la fecha de estructuración determinada por SALUD IPS SURAMERICANA S.A. y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, pero en la anotación de historia clínica, no existe para tal fecha un hecho claro en la salud del demandante que le pudiera otorgar la invalidez y con posterioridad a la fecha indicada por la IPS, existieron tratamientos que brindaron mejoría a la demandante sin que sea coherente la asignación de la estructuración efectuada por dicha entidad. No es cierto que la demandante tenga 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración, porque la historia laboral de la demandante se compone de 101.0 semanas cotizadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2009, por lo tanto, con la fecha de estructuración del 16 de noviembre de 2017 no cumple el requisito de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración; no es cierto que PROTECCIÓN S.A., no haya procedido a reconocer y pagar la prestación económica. Finalmente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda (fls. 274 a 289 del expediente digital 01).

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA en la contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda. Y en relación a los hechos indicó que no le consta la afiliación de la demandante PROTECCIÓN S.A.; acepta la calificación realizada por SALUD IPS SURAMERICANA S.A.; no es cierto que la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA se haya pronunciado de la pérdida de la capacidad laboral porque el caso fue remitido por existir

controversia, exclusivamente de la fecha de estructuración. No le constan los demás hechos de la demanda (expediente digital 04).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 20 de mayo de 2022, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ PROBADAS las excepciones de INEXISTENCIA DE ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ propuesta por SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA SA – IPS SURA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por PROTECCIÓN S.A., y LEGALIDAD, EFICACIA Y OBLIGATORIEDAD DEL DICTAMEN propuesta por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

ABSOLVIÓ a SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA SA – IPS SURA, a PROTECCIÓN S.A. y a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, de todas las pretensiones incoadas en su contra. Y condenó en costas a la demandante.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante solicita se revoque la sentencia y en su lugar se condene a PROTECCIÓN S.A., al reconocimiento y pago de la pensión desde el 18 de abril de 2009 en virtud de la regla jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, al no aplicar en este caso el fenómeno liberatorio de la prescripción, según la sentencia SL 5703 de 2015 y SL 1562 de 2019 , esto es, sin que prescriba las mesadas causadas desde el 18 de abril de 2009; al pago de los intereses moratorios o la indexación del retroactivo y cada una de sus mesadas.

Sustenta su recurso en la existencia de un error grave en la calificación de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, la cual tomó como fecha de estructuración el 16 de noviembre de 2017, que parece ser que se generó un día antes del dictamen del 17 de noviembre de 2017. Lo anterior lo sustenta invocando las subreglas contenidas en la sentencia SL 588 de 2019, que corresponde: 1º. Al tratamiento especial que

se les da a las enfermedades de carácter degenerativo, congénito, crónico, acogido por la Corte Suprema de Justicia a través de sentencia SL 3275 de 2019, en el cual, la pérdida de la capacidad laboral se determine 1º. A partir de la calificación, 2º. A partir del momento de la solicitud de la prestación económica, 3º. Como regla excepcional, a partir de la última cotización, en tanto se continúan conservando una capacidad laboral residual, y, advirtiendo que la regla general se encuentra contemplada en el art. 3º del Decreto 1507 de 2014 establece, que el momento en que se estructura la invalidez es cuando la persona alcanza el 50% de pérdida de la capacidad laboral.

Teniendo claro lo anterior, sostiene el apelante que la fecha de estructuración es anterior a la fecha de calificación, porque con anterioridad a dicha fecha la demandante presentaba las patologías objeto de calificación, y ello se evidencia con la sustentación del dictamen de la IPS Universitaria emitido por el Dr. José William Vargas Arenas, en el que reposa que la invalidez fue generada por el trastorno del disco lumbar y otro por radiculopatía y por el trastorno somatomorfo no especificado, las cuales son anteriores al 18 de abril de 2009 y tiene sustento en las historias clínicas de los años 2008 a 2009 visibles a fls. 164, 221, 262, 479, 614, 712, 820, 608, 707, 815, 499, 594, 702, 810, 501, 503, 592, 700, 807, entre otros, y que son las mismas patologías que en la actualidad persisten, aun con posterioridad a la fecha de estructuración dada por la IPS Universitaria según fl 765, etc; a fls 1079, 1087, 1091 reposa diagnóstico de ciática para el mismo día que fue estructurada la invalidez por parte de IPS Universitaria. Sostiene el apelante, que la fecha de estructuración emitida por SURAMERICANA y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ al corresponder a la fecha de la calificación, desconoce la capacidad laboral residual y se desconoce que se trata de una persona que no cotiza desde hace mucho tiempo.

Resalta que la Dra. Ivet María Osorio, al preguntarle si el demandante tenía con antelación dichas patologías o la severidad para ser grado de invalidez, a lo que respondió que no tenía radiculopatía ni trastorno somatomorfo, afirmación que no es cierta, con base en la historia clínica anteriormente reseñada. Y manifiesta frente al dictamen de parte, que del mismo reposan los documentos de idoneidad en el expediente digital, los cuales fueron decretados como prueba conforme reposa en el archivo digital 10.

Con base en lo anterior, es por lo que considera que el dictamen que debe se debe acogerse es el de la IPS Universitaria, por su claridad y exhaustividad, idoneidad, se demostró por el perito al rendir su declaración, que llega a la conclusión de la condición de invalidez desde el 18 de abril de 2009, con base en la anotación del archivo 04 digitalizado fl 271, en tanto presenta fracturas de columna lumbar y que pese a sus intervenciones ha presentado dolor intenso y limitación funcional, limitación para la marcha con dolor insoportable.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de PROTECCIÓN S.A. solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que los dictámenes de la AFP Protección, las Juntas de Calificación de Invalidez y por el CENDES coinciden en asignar al demandante como fecha de estructuración, noviembre de 2017; el último de los dictámenes, es claro que la demandante para el año 2009 tuvo una mera atención por urgencias, sin embargo, las demás patologías inician en el año 2010 y en adelante se reportan dolencias pero siempre se relacionaron mejorías que fueron manifestadas por la misma demandante y que constan en la historia clínica.

En relación con el dictamen realizado por la IPS Universitaria, concluye la existencia de múltiples errores y de la sustentación del perito en audiencia, permiten concluir que no los fundamentos en que se basa ese dictamen parten de interpretaciones del médico y no de fundamentos que puedan tener sustento en el Manual de Calificación ni en la historia clínica, no existe referencia a datos de la historia clínica ni a ayudas diagnósticas que permitan asumir conclusiones similares a las dadas por el perito de parte.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar: i) La fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de la demandante, si lo es el 18 de abril de 2009 determinado en el dictamen de la IPS Universitaria, y no el 16 de noviembre de 2017 determinada en los dictámenes de SALUD IPS SURAMERICANA S.A. y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ DE ANTIOQUIA; ii) Si la anterior apelación sale avante, se deberá determinar si la accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, intereses moratorios o indexación y costas procesales.

Se encuentra probado en el plenario y no es objeto de discusión que la demandante sufrió accidente de tránsito el 16 de junio de 2008 (fls. 206 del expediente digital 04); dictamen de SALUD IPS SURAMERICANA S.A. del 17 de noviembre de 2017, determina una pérdida de la capacidad laboral del 51.41% estructurado el 16 de noviembre de 2017 (fls. 30 a 37 del expediente digital 01); contra la anterior decisión se apeló la fecha de estructuración, frente a la cual, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA en dictamen del 1º de febrero de 2018 la confirmó (fls. 39 a 43); dictamen de la IPS Universitaria determinó como fecha de estructuración el 18 de abril de 2009 y confirmó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral (fls. 20 a 23); la demandante cotizó hasta el 4 de enero de 2010 (fls. 323 a 325).

1. De la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de la demandante

En primera instancia consideró la A Quo que el documento aportado por la parte demandante, no reunía los requisitos de idoneidad del perito contemplado en el art 226 del CGP, al no haberse aportado con la presentación del dictamen los documentos que lo acredite y solo se allegaron por los requerimientos del despacho, y por el comportamiento del perito en audiencia y las respuestas dadas, al estar desprovistas de claridad y desconocimiento del tema al confundir el concepto clínico y nota médica; el perito se limitó a reiterar lo expresado en el dictamen de parte, sus respuestas eran evasivas, mostró el ánimo de defender una tesis, mostrándose parcializado. No obstante, lo anterior, consideró factible estudiar el documento aportado por la parte demandante como dictamen pericial, en virtud al renombre de la IPS Universitaria y su trayectoria, y al señalarse que tuvo en cuenta la historia clínica de la demandante.

La A Quo le dio validez a la fecha de estructuración plasmada en el dictamen de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA,

y para explicar la decisión adoptada, retomó lo señalado en el art. 3 del Decreto 1507 de 2014 y realizó una relación cronológica de los hallazgos encontrados en la historia clínica aportada en el expediente digital 04, que datan desde el 18 de abril de 2009 (fls. 270, 276) hasta 17 de octubre de 2017 (fls 117 a 120), con el que concluye que la demandante se encuentra que su estado de salud que ha variado desde el accidente de tránsito sufrido el 17 de junio de 2008, en el que se evidencia que el dolor lumbar es constante (espalda fallida), sin embargo, dicha patología se manifiesta unas veces más que otras porque así lo manifestó la demandante en las historias clínicas del 5 de mayo de 2009, 27 de agosto de 2010 y 12 de noviembre de 2012 en que refiere mejoría de su estado de salud en forma parcial, que se evidencia en la continua remisión a tratamientos para la mejoría de su estado, por los médicos tratantes.

Consideró que la fecha de estructuración no puede ser el 18 de abril de 2009, porque en esa fecha la historia clínica hace referencia a una atención de urgencias en la que se indica que el tratamiento para el dolor fue satisfactorio y le dieron de alta; hizo referencia a la evaluación previa de pérdida de la capacidad laboral, en donde se determinó una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50% para el 20 de enero de 2009, sin embargo, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA en dicha oportunidad, al no encontrarse exámenes y diagnósticos relevantes para la evaluación de la paciente, recomendó continuar con la calificación una vez se surtieran todos los exámenes. Señaló que solo fue con posterioridad al año 2010 que la demandante refiere episodios convulsivos y se obtuvo el diagnóstico de epilepsia local postraumático, y en el año 2011 los médicos tratantes empiezan a advertir mejoría; existió ausencia de la historia clínica de los años 2013 a 2016, y finalizaron los hallazgos para el año 2017, los cuales fueron determinantes para que la IPS SURA y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA para fijar como fecha de estructuración el 16 de noviembre de 2017.

Decisión que es apelada por el apoderado de la parte demandante, al considerar que en el expediente reposan los documentos que determinan la idoneidad del dictamen en el archivo digital 10; adicionalmente, existe un error en la fecha de estructuración calculada por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA porque ella se trata de la

fecha de la calificación y no tuvo en cuenta que con anterioridad a la calificación la demandante tenía las patologías objeto de calificación; no tuvo en cuenta la capacidad residual con base en lo señalado en la sentencia SU 588 de 2016; y porque la perito de SALUD IPS SURAMERICANA S.A. aseguró que la accionante no padecía las patologías de radiculopatía ni trastorno somatomorfo, a pesar que reposa el diagnostico en la historia clínica.

En primera medida, frente a los documentos que determinan la idoneidad del perito José William Vargas Arenas, se evidencia del documento visible a fls 24 a 27 del expediente digital 01, anexo a la demanda, que cumplió con los requisitos exigidos en el art. 226 del CGP, al determinarse la identidad de quien rindió el dictamen; la profesión, oficio y actividad ejercida; la lista en donde el Dr. José William Vargas Arenas ha actuado como perito; certificó que no está inmerso en las causales del art. 50 del CGP; declaró que la valoración del presente caso no varió de los que normalmente utiliza y los exámenes, experimentos e investigaciones no variaron en el presente caso; y mencionó los documentos utilizados para la experticia. Adicionalmente, en la audiencia de trámite, el apoderado de la parte demandante expresó haber remitido al correo electrónico del despacho documentos del Dr. José William Vargas Arenas, mismos que reposan en el expediente digital 10 y que constan de: hoja de vida del Dr. José William Vargas Arenas; nuevamente se aportan los documentos. Documentación con la que se alcanza a cumplir la formalidad del art 226 del CGP, bajo el entendido que los documentos fueron aportados desde la presentación de la demanda y complementados previo a adelantarse el interrogatorio al perito, oportunidad en que según el art. 228 del CGP, el Juez también tiene la potestad de interrogar sobre *“su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen”*.

En relación con la afirmación hecho por la parte apelante, cuando sostiene error en el dictamen de la Dra. Ivet María Osorio (testigo técnico de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA), quien manifestó en su declaración, que la demandante no tenía radiculopatía ni trastorno somatomorfo, debe aclarar esta Corporación, que una vez escuchada la ponencia de la testigo técnica, si bien señaló que la diferencia del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral que se observa entre el primer dictamen realizado a la demandante en el año 2010 y el dictamen

realizado por ella el 16 de noviembre de 2017, era porque en el año 2010 no presentaba radiculopatía soportada paraclínicamente (min 0:16:20 audiencia parte 2), considera la Sala que dicha afirmación no justifica la imputación de un error en el dictamen emitido por SALUD IPS SURAMERICANA S.A. en primer lugar, porque el dictamen realizado por SURAMERICANA S.A. el 6 de febrero de 2010 **no fue realizado por la testigo técnica Dra. Ivet María Osorio** sino por el Dr. Darío Antonio Toro Bedoya (fl. 200 del expediente digital 04) por lo tanto, se trata de una apreciación frente a la cual la testigo técnica no tiene el conocimiento de fondo para determinar si en esa oportunidad, el perito contó con la historia clínica completa para realizar la experticia. Y en segundo lugar, porque lo que realmente interesa, es que el dictamen emitido por la Dra. Ivet María Osorio calificó la deficiencia de Discopatía lumbar + radiculopatía izquierda L5 (Síndrome de espalda fallida), Trastorno somatomorfo (sensibilización central) e Hipertensión ortostática vs extrasístoles aisladas.

Ahora, centrándonos en el error de la fecha de estructuración del dictamen de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, invocado por la parte accionante, por no tenerse en cuenta que las patologías objeto de calificación eran anteriores a la calificación, afirmación que no se compadece con la realidad, toda vez que el dictamen de SALUD IPS SURAMERICANA S.A. calificó las deficiencias de Discopatía lumbar + radiculopatía izquierda L5 (**Síndrome de espalda fallida**), Trastorno somatomorfo (sensibilización central) e Hipertensión ortostática vs extrasístoles aisladas; por lo tanto, si el síndrome de espalda fallida se generó como consecuencia de la cirugía practicada en octubre de 2008 (conforme fue indicado por el Dr. José William Vargas Arenas en su interrogatorio de parte (min 1:40:35 audiencia parte 1), es claro para la Sala que tanto SALUD IPS SURAMERICANA S.A. como la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA tuvieron en cuenta las patologías presentadas por la hoy demandante desde el año 2008.

Ahora bien, en lo que respecta a la fecha de estructuración, la norma con la que se realizaron los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral es el Decreto 1507 de 2014, por lo tanto, nos debemos remitir al art. 3º, el cual estableció:

“Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

(...)

Fecha de estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.

Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.”

Visto lo anterior, de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral que reposan en el plenario encontramos, que SALUD IPS SURAMERICANA S.A. consideró que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de la demandante data del **16 de noviembre de 2017** por tratarse de la *“fecha de la evaluación funcional por medicina laboral donde se identifica estado funcional actual”* (fls. 29 a 37 del expediente digital 01).

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA **confirmó la fecha de estructuración** teniendo como sustento que *“FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, NO SE MODIFICA LA ASIGNADA POR EL FONDO DE PENSIONES EN RAZÓN A QUE LA FECHA ESPECÍFICA CONSIDERADA POR EL APODERADO DE LA PACIENTE CORRESPONDE A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL 41.55% CORRESPONDIENTE A UNA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL, DEBE TENERSE EN CUENTA ADEMÁS LO CONCEPTUADO POR STAFF DE COLUMNA DEL 20 DE AGOSTO DE 2010, EN QUE SE REGISTRA “paciente con dolor crónico luego de cirugía de columna lumbar con signos de magnificación claros sin compromiso neurológico. No se evidencia masas a nivel cervical, el examen físico de columna cervical es normal. Refiere sintomatología con llanto frecuente, anergia, alteración del apetito, episodios de pérdida del*

conocimiento pocos claros y no acompañados de falta de control de esfínteres. Se evidencia condiciones psicosociales que están soportando y manteniendo su condición de enfermedad, sin embargo su aspecto físico no hace correlación con un evento de depresión mayor...” POR EL CUAL, PARA LA FECHA DEL 20 DE ENERO DE 2009, LA PACIENTE NO PODÍA CONSIDERARSE INVALIDA” (fls. 39 a 42 del expediente digital 01)

Y la IPS Universitaria adoptó como fecha de estructuración el **18 de abril de 2009**, y en el interrogatorio rendido por el Dr. José William Vargas Arenas, manifestó que dicha fecha se sustenta, en la historia clínica del Hospital San Vicente de Paul de dicha data que reposa a fls 270 y 271 del expediente digital 04, de la que se extrae: *“MOTIVO DE CONSULTA: dolor muy intenso en región lumbar. ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE QUE FUE ATROPELLADA POR 1 BUS HACE 10 MESES Y SUFRIÓ FRACTURAS EN COLUMNA LUMBAR, Y QUE A PESAR DE HABER SIDO INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HA SEGUIDO PRESENTANDO DOLOR INTENSO Y LIMITACIÓN FUNCIONAL. HOY EL DOLOR SE HIZO INTOLERABLE, OBLIGÁNDOLA A CONSULTAR. (...)”*

Sin embargo, pasó por alto el Dr. José William Vargas Arenas que, en la historia clínica de la demandante, reposan manifestaciones hechas por la demandante y por conceptos médicos, en donde se hace referencia a la **mejoría presentada por la paciente con posterioridad al 18 de abril de 2009** y que corresponden a los siguientes:

- La demandante sufrió accidente de tránsito el **16 de junio de 2008** (fls. 206 del expediente digital 04)
- Historia clínica del **15 de enero de 2009** *“Motivo de consulta: **hace 3 meses de columna lumbar estaba bien**, pero hace 2 meses con dolor lumbar le chuzza atrás y tirones al estar parada el pie empieza a doblarse dolor irradia en pierna izq empieza a tambalearse...”* (Resalto de la sala) (fl. 173)
- Historia clínica de registro de urgencias del 18 de abril de 2009, adoptada por el perito de la IPS Universitaria para tomar la decisión de fecha de estructuración indicó: OBSERVACIONES: *paciente quien ingresa con dolor lumbar intenso, **ahora luego de tto y observación***

en urgencias refiere inmensa mejoría por dolor, por lo que se decide dar de alta con instrucciones y formula” (Resalto de la Sala) (fl. 270)

- Historia clínica del **5 de mayo de 2009** “*Enfermedad actual: paciente con marcha temblor intencional de columna dorsal, temblor en cabeza en extremidades superiores y marcha a pasitos con marcha bizarra no lassegue se envió manejo por psiquiatría le envió medicación y que de pronto tenía que hospitalizarla. El nuevo neurólogo le envió RMN... “a veces dice que con el clima con calor está aliviada y no tiene el beriberi...” con el frio empeora mucho a veces sin temblor y en ocasiones se queda paralizada y no puede movilizar las piernas está paralizada. No evidencia de fistula de líquido cefalorraquídeo contenida. No hay dolor para la marcha sin dolor alguno ahora. Hay días en que estoy aliviada del todo... hace 3 meses estoy de para atrás, pero porque si antes estaba aliviada del todo? (...)*” (Resalto de la Sala) (fl. 284).
- Historia clínica de urgencias del **24 de junio de 2009** “OBSERVACIONES: **paciente con mejoría de su dolor**, estable hemodinámicamente, refiere mejor capacidad para la movilización,... se da de alta con formula medica e indicaciones y signos de alarma” (Resalto de la Sala) (fl. 288)
- Historia clínica de medicina laboral del **21 de octubre de 2009** “RECOMENDACIONES: Considero que como parte del tratamiento y la rehabilitación **pudiera intentarse reintegro laboral** bajo recomendaciones con seguimiento de salud ocupacional...” (Resalto de la Sala) (fl. 301)
- Historia clínica de urgencias del **21 de diciembre de 2009** “OBSERVACIONES: Se evalúa **paciente con gran respuesta a la terapia analgésica antiinflamatoria**, puede movilizar... las manos, el cuello, afebril, hidratada. Sin complicaciones por el uso de la medicación. Se da de alta por mejoría, instrucciones de volver si dolor no mejora... RECOMENDACIONES: ... No ha podido desempeñar oficio – se ha emitido recomendaciones ocupacionales sin posibilidad de ejecución... para revisión por Medicina Laboral se ha solicitado la relación de oficios que ha logrado desempeñar durante el periodo de recomendaciones Medico Ocupacionales... para seguimiento ocupacional.” (Resalto de la Sala) (fl. 310 y 314)

- Historia clínica neurocirugía del **26 de enero de 2010** *“Enfermedad actual: paciente alerta coherente más tranquila marcha mejor puede estar parada y sin apoyo puede elevar piernas extender y rodillas flejadas. Cuello doloroso para movimientos amplios usa collar duro dolor a la paocion (sic) lumbar “tengo ganas de ir a piscina para ver si puedo se le explica que si... está mejor porque empecé este año bien... más liviano...” (fl. 313)*
- Acta de staff columna del 20 de agosto de 2010 *“CONCEPTO: paciente con dolor crónico luego de cirugía lumbar con signos de magnificación claros sin compromiso neurológico. NO se evidencian masas a nivel cervical, el examen físico de la columna cervical es normal. Refiere sintomatología con llanto frecuente, anergia, alteración de apetito, episodios de pérdida de conocimiento poco claros y no acompañados de falta de control de esfínteres. Se evidencia condiciones sicosociales que están soportando y manteniendo su condición de enfermedad sin embargo su aspecto físico no hace correlación con un evento de depresión mayor. No media tratamiento quirúrgico. No se beneficia de ningún tratamiento invasivo o intervencionista, requiere evaluación y apoyo por psiquiatría y psicología, posterior a esto podría beneficiarse de intervención por fisioterapia con el fin de mejorar su condición muscular.” (fls. 667 y 670)*
- Historia clínica del Instituto Colombiano del Dolor, del **11 de enero de 2011** *“Enfermedad actual: ... historia de 3 años de dolor lumbar luego de accidente de tránsito, fue llevada a CX fijación TP lumbar, posteriormente espalda fallida, dolor irradiado a MII hasta planta, además, cervicalgia y dorsalgia ocasional, no ha recibido tto intervencionista, **el dolor actualmente está controlado parcialmente**, en ocasiones se intensifica y la incapacita significativamente” (Resalto de la Sala) (fl. 320)*

Con base en lo anterior, considera la Sala que no hay lugar a acoger el dictamen de la IPS Universitaria aportado por la parte demandante, y se confirmará la sentencia de primera instancia, al no encontrarse justificado en la historia clínica de la demandante, la razón por la cual el perito de la IPS Universitaria adoptó como fecha de estructuración el 18 de abril de 2009, más aún cuando, obra prueba del dictamen emitido por SURA el **6 de febrero de**

2010, en donde se calificó las deficiencias de síndrome espalda fallida y restricción movimiento columna dorsal, evidencia **una pérdida de la capacidad laboral del 41.55% estructuradas el 20 de enero de 2009**, prueba con la que se puede concluir que para el 20 de enero de 2009 la demandante no contaba con más del 50% de pérdida de la capacidad laboral, y aunado a ello, el 5 de noviembre de 2010 la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA consideró imposible proceder a realizar calificación de la demandante, por tener pendiente cirugía, por haber relatado la demandante episodios de ausencia que no habían sido valorados, definidos, estudiados, ni tratados y los relaciona con el episodio inicial de su sintomatología, lo que hizo que dicha entidad devolviera el expediente y sugirió una nueva valoración por la EPS y AFP para que definieran diagnósticos precisión que no se encontraban establecidos (fls. 195 a 200 y 202) y como se reflejó en los aportes de las historias clínicas transcritas, con posterioridad al año 2009 la demandante presentó mejoría en su estado de salud, a tal punto, que Medicina Laborar consideró la posibilidad de intentar el reintegro a su vida laboral.

Finalmente, en relación a la solicitud de dar aplicación a la capacidad laboral residual aplicable a las enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, considera la Sala que las patologías que presenta la Sra. Niny Johana Piedrahita no ostenta dicha calidad ya que las mismas no deviene del nacimiento y al entender como enfermedad crónica la *“afección que por lo general dura 3 meses o más, y es posible que empeore con el tiempo. Las enfermedades crónicas casi siempre se presentan en adultos mayores y a menudo se controlan, pero no se curan. Los tipos más comunes de enfermedades crónicas son el cáncer, la cardiopatía, el accidente cerebrovascular, la diabetes y la artritis.”*¹, y como enfermedad degenerativa *“Enfermedad en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo. Como, por ejemplo, la osteoartritis, la osteoporosis y la enfermedad de Alzheimer”*², tampoco se

¹ <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/enfermedad-cronica>

² <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/enfermedad-degenerativa>

enmarcarían las patologías de Discopatía lumbar + radiculopatía izquierda L5 (Síndrome de espalda fallida), Trastorno somatomorfo (sencibilización central) e Hipertensión ortostática vs extrasístoles aisladas.

En consideración a lo expresado, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, sin que haya lugar a analizar los demás puntos objetos de apelación.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, en la suma de \$1.000.000, a favor de la sociedad PROTECCIÓN S.A., por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, en la suma de \$1.000.000, a favor de la sociedad PROTECCIÓN S.A., por no haber prosperado el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMANDANTE | : NINY JOANNA PIEDRAHITA URIBE |
| DEMANDADO : | : ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A. y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA |
| TIPO DE PROCESO | : ORDINARIO |
| RADICADO NACIONAL | : 05-001-31-05-018-2018-00309-01 |
| RADICADO INTERNO | : 165-22 |
| DECISIÓN | : -CONFIRMA SENTENCIA |

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 05 de agosto de 2022 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 05 de agosto de 2022 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO